

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

ADVERTENCIA OFICIAL.

Las leyes y disposiciones generales del Gobierno, son obligatorias para cada capital de provincia donde se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la provincia. (Ley de 28 de Noviembre de 1857). Las disposiciones de las autoridades, excepto las que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente, como asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio de la Nación que dimanare de las mismas, pero los de interés particular pagarán su inserción, entendiéndose en este caso con el Editor del Boletín.

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS EXCEPTO LOS DOMINGOS.

PRECIOS DE SUSCRIPCION.—En Orense, por trimestre, 7 pesetas.—Para fuera de esta capital, franco de porte, por trimestres adelantados, 8 pesetas.—Números sueltos, 38 centimos. Se suscribe en esta capital, Imprenta de José M. Ramos, Colón, número 16.—En las demás provincias, en las principales librerías.

PRIMERA SECCION.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA.

DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. el Rey (Q. D. G.) con-
tinúa en esta Corte sin novedad
en su importante salud.

De igual beneficio disfrutan
la Serma. Sra. Princesa de
Asturias, las Sermas. Sras. In-
fantas Doña María del Pilar,
Doña María de la Paz y Doña
María Eulalia.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Por las Secciones
de Gobernación y Hacienda del
Consejo de Estado se ha emitido
el siguiente dictamen:

Excmo. Sr.: El Presidente de
la Diputación provincial de Ma-
drid, en comunicación dirigida
al Gobernador de la provincia
en 27 de Julio último, hizo pre-
sente que la Corporación que
preside se veía en la necesidad
de emplear los procedimientos
establecidos por la instrucción
de 3 de Diciembre de 1869 contra
los actuales Ayuntamientos pa-
ra el cobro de los descubiertos
por razón del repartimiento que
hacía contra los pueblos de la
provincia para cubrir los gastos
de la misma, con sujeción al
párrafo segundo del art. 81 de
la ley Provincial:

Que varios Ayuntamientos ha-
bían reclamado contra el apre-
mio, alegando que aquellos des-
cubiertos procedían de ejercicios
anteriores, y que muchos de

ellos debían su origen a no ha-
berse satisfecho a los pueblos
los intereses del 80 por 100 de
sus bienes de Propios vendidos;

Que aunque esta fuese una de
las causas determinantes de los
atrasos, no podía admitirse co-
mo fundamento bastante para
que la Diputación deje de utili-
zar los medios que la ley permi-
te para hacer efectivo el contin-
gente provincial, porque a falta
de aquellos recursos se podían
arbitrar otros, como lo habían
verificado algunas Corporacio-
nes municipales;

Que tampoco podía admitirse
que los apremios se dirigiesen
contra los Ayuntamientos res-
pectivos, porque no debiendo ser
responsables los individuos que
los componían, sino por negli-
gencia u omisión probada, esto
exigiría en cada caso la forma-
ción de un expediente de labo-
riosa tramitación, que no siem-
pre daría el resultado apetecido;

Que era jurisprudencia admi-
tida que los Ayuntamientos se
hicieran cargo de los descubier-
tos que dejaban sus antecesores
citando en apoyo de esa opinión
diferentes resoluciones del Go-
bierno, de casos particulares,
mas en vista de las reiteradas
quejas de los Ayuntamientos, se
creía en el deber el mismo Pre-
sidente de exponer las antedi-
chas consideraciones, a fin de
que, si se estimaban oportunas,
se elevasen al Gobierno para la
decisión que juzgase mas acer-
tada.

El Gobernador, al pasar a ma-
nos de V. E. la referida comu-
nicación, manifiesta que los
procedimientos incoados por la
Diputación y por el Jefe econó-
mico de la provincia habían
dado lugar a las mencionadas
quejas, que considera atendi-
bles, porque de aceptarse en ab-
solutos los medios que indica el
Presidente de la Diputación, no
habría facilidad de tener al fren-

te de la Administración munici-
pal a individuos que por su po-
sición estuviesen llamados a
ello, ni se lograría normalizar la
situación de los Municipios.

Esta consideración induce, en
concepto del Gobernador, a no
aceptar las indicaciones hechas
por el Presidente de la Diputa-
ción, al menos en la forma que
expresa, pareciéndole mas acer-
tado atenerse a lo dispuesto por
los artículos 78 de la instrucción
de 3 de Diciembre de 1869, y 101
y 102 del Real decreto de 23 de
Mayo de 1845, por lo cual, y sin
desconocer la jurisprudencia
sentada por las ordenes resolu-
torias que se citan, entiende mas
conforme a la ley declarar que
el procedimiento contra los Al-
caldes y los Ayuntamientos en
los casos previstos en el men-
cionado decreto de 1845 se in-
coen tan sólo cuando concurren
las circunstancias que en él se
especifican, y con arreglo a la
ley de 17 de Julio de 1869 é in-
strucción de 3 de Diciembre del
propio año, sin que en ningún
caso dejen de instruirse los ope-
rarios expedientes, acerca de las
reclamaciones promovidas con
ocasión de la observancia de la
referida instrucción, debiendo
en las demás dirigirse el apremio
contra los verdaderamente res-
ponsables, ó sea contra los que
compusieron los Ayuntamientos
de donde procedan los descu-
biertos, provenientes en muchas
ocasiones, no de falta de cobro,
sino de malversación, y alza-
miento de caudales; y en fin,
contra cuantos de un modo ú
otro han contraído responsabi-
lidad por la gestión de los intere-
ses públicos.

Dicha Autoridad termina sig-
nificando la conveniencia de lla-
mar la atención del Sr. Ministro
de Hacienda para que procure
satisfacer a los pueblos con re-
gularidad los intereses del 80
por 100 de sus bienes enajena-

dos, que constituyen uno de los
rendimientos mas poderosos
para atender al levantamiento
de cargas, ó en su defecto que
se les admita compensación por
las cuotas que han de ingresar
anualmente en el Tesoro.

La Sección respectiva de la
Dirección general de Adminis-
tración local, en vista de la di-
vergencia que existe entre el
Gobernador y la Diputación pro-
vincial, juzgó procedente que se
oyera el parecer de estas Seccio-
nes; y habiéndose conformado
V. E. con tal dictamen, se ha
remitido el expediente al Conse-
jo con Real orden de 21 de Ene-
ro último.

En cumplimiento, pues, de lo
mandado, y a fin de esclarecer
tan importante materia, las Sec-
ciones examinarán con separa-
ción los puntos siguientes:

1.° Personas responsables de
los débitos de los Municipios
por razón del contingente pro-
vincial.

2.° Autoridad a quien corres-
ponde expedir los apremios.

3.° Procedimientos que se
hayan de observar.

Acercá del primer extremo
la ley Municipal, después de de-
clarar que la recaudación y ad-
ministración de los fondos mu-
nicipales está a cargo de los
respectivos Ayuntamientos,
efectuándose por sus agentes y
delegados, mediante la retribu-
ción que les designen, y fianzas
que éstos deban prestar, deter-
minando que tales agentes son res-
ponsables ante el Ayuntamiento,
quedando éste en todo caso civil-
mente para el Municipio por negli-
gencia u omisión probada, sin per-
juicio de los derechos que con-
tra aquellos se puedan ejercitar
(artículos 154, 157 y 158).

La instrucción de 3 de Diciem-
bre de 1869, relativa al modo de
proceder para hacer efectivos
los débitos a favor de la Hacen-
da pública, aplicable a los des-

cubiertos del Municipio, en virtud de lo prescrito en el art. 152 de la expresada ley orgánica, proviene que todo Recaudador contrae el compromiso de entregar en Caja, en los períodos que marca, el importe de las cuotas y recargos que perciba, a excepción de aquellos que acrediten documentalmente estar siguiendo los procedimientos ejecutivos; añadiendo que así no lo hiciesen se incoará el procedimiento de apremio contra los Recaudadores, los cuales son también responsables de todos los descubiertos en que por su negligencia incurran los contribuyentes (artículos 50 y 51).

Al propio tiempo el Real decreto de 23 de Mayo de 1845 a que se refiere el art. 76 de la mencionada instrucción, fija taxativamente los casos en que proceda el apremio, contra los Ayuntamientos y Alcaldes, expresando que se ejerce con la Corporación:

1.º Cuando por su culpa no se haya ejecutado en tiempo oportuno el repartimiento, y por consiguiente no haya podido el cobrador dar principio a la cobranza en los plazos señalados.

2.º Cuando sus disposiciones hayan entorpecido directa o indirectamente la cobranza.

Y 3.º Cuando en los casos de responsabilidad exclusiva del cobrador no alcanzase el producto de la venta de los bienes muebles de este y de los inmuebles de su fianza a cubrir su débito o descubierto.

También procede el apremio contra los Repartidores, mancomunadamente con el Ayuntamiento, cuando hayan diferido sus operaciones más allá del tiempo que para concluir las les está señalado, y esta sea la causa del entorpecimiento en la cobranza (art. 101).

Y por lo que hace al apremio contra el Alcalde, dice que podrá tener lugar:

1.º Cuando resulte que no convocó en tiempo oportuno al Ayuntamiento para que este se ocupase de las operaciones del repartimiento que le están encomendadas.

2.º Cuando haya negado o dilatado las providencias o auxilios pedidos por el cobrador o por el ejecutor de apremios para ejercer sus respectivas funciones.

3.º Cuando en las notas o estados de cobranza autorizados con su firma se hayan omitido cantidades cobradas.

4.º Y finalmente cuando con sus disposiciones haya entorpecido directa o indirectamente la cobranza o encubierto algún descuido del cobrador (art. 102).

De tales preceptos se deduce

fácilmente que de la recaudación de los fondos municipales nacen tres distintas responsabilidades, en que incurren, según los casos, los Recaudadores, los Ayuntamientos o los Alcaldes.

Esa diversa responsabilidad, que obedece al principio de justicia de que cada cual responda de sus propios actos, obliga a que se depure, antes de expedir el apremio, la persona o personas responsables, mediante la instrucción del oportuno expediente, en que sean oídos los interesados, y el cual debe resolver

en primer término, el Ayuntamiento que se halle en ejercicio respecto de los primeros contribuyentes y de los segundos que hayan cesado en sus funciones, puesto que dicha Corporación es la que tiene la representación del Municipio, ante el cual deben responder con arreglo a la ley los encargados de la Administración municipal. Y cuando se trate de descubiertos que procedan de los actuales Ayuntamientos, la Diputación sería la competente para declarar la responsabilidad de los Alcaldes y Concejales.

De este modo quedará probada, cuando la hubiese, la negligencia u omisión de los Ayuntamientos, según requiere la ley, y se alejará el peligro de proceder contra el que sea inculparable.

Respecto de la Autoridad que haya de expedir el apremio, que es el segundo punto que se ventila, las Secciones atienden asimismo al precepto legal en el sentido de que cuando la responsabilidad sea de los primeros contribuyentes, o de los segundos que hayan cesado en sus funciones, el Alcalde es el que tiene facultad, como Jefe más caracterizado de la Administración local, para compeler a unos y otros al pago de sus débitos.

Otra cosa es cuando la responsabilidad sea de los Ayuntamientos y Alcaldes que se hallen en ejercicio; pues entonces, una vez depurada su negligencia o morosidad por las Diputaciones, según se ha dicho, y acordado por estas el apremio, corresponde expedir el mandamiento de ejecución a los Gobernadores, que son los encargados de administrar los acuerdos de dichas Corporaciones.

Por último, los procedimientos que se han de seguir, a que se contrae el último punto de este informe, continúan siendo administrativos contra primeros y segundos contribuyentes, según determinan la ley de 19 de Julio de 1869, debiendo observarse las formalidades y requisitos prevenidos en la instrucción de 3 de Diciembre del

misimo año, ejerciendo los Alcaldes las funciones anteriormente atribuidas a los Jueces municipales, conforme se halla declarado por el art. 6.º de la ley de Presupuestos generales del Estado de 1877-78.

Habiéndose dado finalmente las Secciones de la indicación hecha por el Gobernador de esta provincia respecto de la entrega de los intereses de Propios vendidos a los pueblos, el poder legislativo, reconociendo la justicia que entrañan las aspiraciones de éstos, ha ordenado en el art. 13 la ley de Presupuestos del corriente ejercicio económico que se cumpla con ese deber en el mas

breve plazo posible. Inmediatamente parece que tanto la exención de la instrucción de 3 de Diciembre del

En el mismo artículo de la ley de Presupuestos se establece que los débitos al Tesoro por censu-

mos, cereales y sal, por el impuesto personal y por el de por 190 sobre presupuestos municipales correspondientes a los años anteriores a 1877-78, se abliquen en seis años, pagándose en cada uno de ellos una sexta parte de cada uno de los débitos con los créditos que les resulte contra el Estado por sus bienes de Propios vendidos.

El laudable principio de que, mientras el Estado de la Nación da provincial, lo permita, se inicie ese ejemplo por las Diputaciones provinciales, siendo de esperar que con los aplazamientos que a los Ayuntamientos se concedan y las facultades que a los mismos les otorga el art. 16 de la ley de Presupuestos del corriente año para proponer a ese Ministerio, de acuerdo con las Juntas municipales, los impuestos, cargos manutenciones extraordinarios que consideren de absoluta necesidad, además de los ingresos ordinarios que la ley Municipal autoriza, podrá abasarse en tiempo no lejano, normalizar la situación precaria de la generalidad de los Municipios.

Por las consideraciones expuestas, las Secciones opinan:

1.º Que los débitos de los Municipios a favor de la provincia deben exigirse de los que resulten responsables, previa declaración de serlo, en virtud del expediente que se instruya al efecto en los términos que se expresan en el fondo del dictamen.

2.º Que a los Alcaldes corresponde expedir los apremios contra primeros contribuyentes y contra los segundos que hayan cesado en sus funciones, y a su vez al Gobernador cuando se haya de expedir contra los Ayuntamientos y Alcaldes que estén en ejercicio.

3.º Que los procedimientos de apremio se han de observarse en ello las formalidades prevenidas en la instrucción de 3 de Diciembre de 1869, ejerciendo el Alcalde las funciones anteriormente atribuidas a los Jueces municipales.

4.º Que se exija el coto de las Diputaciones provinciales para que, mientras lo permite el estado de la Hacienda provincial, concedan aplazamientos a las Corporaciones municipales para el pago

de los débitos por el repartimiento hecho a los pueblos.

Y habiéndose conformado S. M. el Rey (Q. D. G.) con el precepto dictado en la instrucción de 3 de Diciembre de 1869, en el mismo se propone.

De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento, y de la Diputación provincial y de las electos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de Marzo de 1879.—Silvela.—Sr. Gobernador de esta provincia.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

SECCION DE FOMENTO.

Don Gerardo Neira Florez, Gobernador civil de la provincia. Hago saber que por providencia del día de ayer se acordó admitir, sin perjuicio de tercero y salvo mejor derecho, una solicitud

presentada a las doce y media de su tarde por D. Joaquín Vila Cid a nombre y representación de don Nemisio Aguiar Alonso, vecino de Puente Nuevo, municipio de Carballeda de Valdeorras, pidiendo el registro de doce hectáreas de mineral de hierro con el título de "San Vicente" sitas en término de Robido, distrito de la Rúa; que linda al Norte con monte común del pueblo de Gereigido de Quiroga, Sur con sotos de castaños y labrados del pueblo de Robido, Este con labrados y sotos nombrados de Carballeira y Oeste con sotos del pueblo de Ferreira. Verifica su designación tomando como punto de partida un cuenco o piedra blanca situado en el barranco de la Forcadura.

Lo que se anuncia al público por medio de este periódico oficial y los correspondientes edictos que se fijaran en la casa consistorial de la Rúa y en el cuadro de anuncios de esta Sección de Fomento para que las personas que se crean perjudicadas con el registro, esta mina acudan con sus reclamaciones a este Gobierno de provincia en el improrogable plazo de sesenta días, conforme a lo prevenido en la ley del ramo y más disposiciones vigentes.

Orense Abril 8 de 1879.

El Gobernador.
GERARDO NEIRA FLOREZ.

JUNTA PROVINCIAL DEL CENSO.

CIRCULAR.

Devueltos a todas las Juntas municipales, en cumplimiento del artículo 84 de la Instrucción para llevar a cabo el Censo, los datos de los auxiliares y resúmenes municipales que los mismos habían remitido a esta provincial para su aprobación, procede que los Sres. Alcaldes, que aun no lo han hecho, me acusen el recibo de los mismos documentos.

Orense 8 de Abril de 1879.—El Gobernador Presidente, Gerardo Neira Florez.

COMISION-INVESTIGACION DE BIENES NACIONALES DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

La Direccion general de Propiedades y Derechos del Estado, en uso de las atribuciones que le concede el decreto de 5 de Agosto de 1874, acordó, en 31 de Marzo último, de conformidad a lo dispuesto en el art. 137 de la Instrucción de 31 de Mayo de 1855, se publiquen los nombres de los compradores de las fincas a continuación expresadas, a quienes como mas ventajosos postores se las adjudicó dicha autoridad, en virtud de los remates de 13 de Diciembre, 24 de Enero y 21 de Febrero últimos.

REMATE DEL 13 DE DICIEMBRE.

Nombre de los rematantes.	Su vecindad.	Clase de la finca.	Su situacion.	Importe del remate. Ptas. Cts.
2514 Doña Josefa Carrera	Sabucedo de Montes	Monte	Carbayal	3

REMATE DEL 24 DE ENERO.

1896 D. Amaro Cruz	Verin	Suerte de terreno	Tamaguelos	10
1898 D. Juan Manuel Salgado	Orense	Labradio	Bases de Arial	7-75
1899 El mismo	Idem	Idem	Cogueira de San Roque	5-50
1900 El mismo	Idem	Terreno inculto	Pena Cadela	2-13
1901 El mismo	Idem	Idem	Tras do Santo	2-13
1902 El mismo	Idem	Idem	Carballiza	2-13
1903 El mismo	Idem	Terreno	Idem	8-25
2906 El mismo	Idem	Labradio	Chamborra	3-25
2907 El mismo	Idem	Idem	Loma de Feirosa	3-25
2908 El mismo	Idem	Terreno	Idem	2-13
2909 El mismo	Idem	Labradio	Idem	4-38
2562 D. Manuel Mendez	Verin	Idem	Plaza de Medio	11-25
2563 El mismo	Idem	Idem	Cantofina	16-88
2564 El mismo	Idem	Idem	Leira de Manuel	4-50
2565 El mismo	Idem	Nabal	Quebrada	16-88
2566 El mismo	Idem	Prado y poula	Canizo	4-50
2567 El mismo	Idem	Labradio	Sombrio	8
2568 El mismo	Idem	Idem	Calonge	3-38
2569 El mismo	Idem	Hueria	Eidos do Forno	4-50
2570 El mismo	Idem	Prado y labradio	Pozza	9
2571 El mismo	Idem	Prado	Relva	6-75
122 Doña Benita Nuñez	Tamaguelos	Casa núm. 54	Prado de Abajo	88
187 La misma	Idem	Labradio	Tamaguelos	81
190 La misma	Idem	Idem	Baseo de Arial	33
			Yañez	

REMATE DEL 21 DE FEBRERO.

6 D. Antonio Alvarez	Castrelo de Abajo	Casa	Castrelo de Arriba	50
187 El mismo	Idem	Idem	Castrelo de Abajo	33
188 El mismo	Idem	Labradio	Val de Nogueiras	28-13
189 El mismo	Idem	Prado	O Feijo	16-88
190 El mismo	Idem	Labradio	Chaira de Vereia	11-25
191 El mismo	Idem	Idem	Gándaras	3-38
192 El mismo	Idem	Prado	Fonte	28-13
2412 El mismo	Idem	Labradio y poula	Seara do Lombo	5-63
2413 El mismo	Idem	Labradio	Os Tocos	5-63
2414 El mismo	Idem	Idem	Idem	5-63
2524 El mismo	Idem	Idem	Carril de Arriba	4-50
2525 El mismo	Idem	Idem	Cabaceiro	5-63
2526 El mismo	Idem	Idem	Fórja	15-75
2527 El mismo	Idem	Idem	Campo	3-38
2528 El mismo	Idem	Nabal	Pombo de Muños	2-25
2529 El mismo	Idem	Prado	Flejo	16-88
2530 El mismo	Idem	Labradio	Cabeza	16-88
2531 El mismo	Idem	Idem	Cernadina	3-38
2532 El mismo	Idem	Idem	Chaira de Vereia	11-25
2533 El mismo	Idem	Vina y poula	Viócho	16-88
2534 El mismo	Idem	Un castaño	Redondelo	3-38
2535 El mismo	Idem	Dos castaños	Gorvia	6-75
2536 El mismo	Idem	Un castaño	Barreiros	3-38

En su consecuencia se encarga a los Sres. Alcaldes de los respectivos distritos donde radican las fincas adjudicadas, hagan entender a sus compradores se presenten a realizar los pagos lo mas pronto que les sea posible, con apercibimiento de que pasados los 15 dias que les están señalados por instrucción, perderán el depósito que consignaron para optar a la subasta; se procederá a otra nueva por su cuenta, y quedarán responsables a satisfacer la diferencia que resulte entre uno y otro remate, así como a las demás penas marcadas por las instrucciones vigentes.

Orense 7 de Abril de 1879. El Comisionado en principal, Angel M. Lozano.

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS
DE ORENSE.

La Direccion general del ramo me comunica lo siguiente:

«Por Real orden de 4 del actual, que ha sido comunicada por el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda al de la Gobernacion, S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer:

1.º Que en 30 de Abril próximo queden fuera de circulacion los sellos de Comunicaciones que hoy se emplean, á excepcion de los de un céntimo, y que en su equivalencia se pongan á la venta en 1.º de Mayo siguiente los precisos para satisfacer los derechos ordinarios y extraordinarios del porte de la correspondencia y partes telegráficas, con la denominacion de sellos de Correos y Telégrafos.

2.º Que para la tirada de los nuevos sellos se utilice el punzon matriz grabado para los del impuesto de guerra que se están elaborando, anulándose éstos y pasado á la cuenta de efectos inutilizados.

3.º Que desde 1.º de Mayo próximo deje de fijarse el sello de guerra en las cartas, impresos y certificados que hoy lo llevan, empleándose en su equivalencia los sellos de Correos y Telégrafos que correspondan á su porte ordinario y sobreprecio establecido por el art. 57 de la ley de Presupuestos de 1877 á 78.

4.º Que mientras se elaboran nuevas tarjetas postales continúen las que hoy se venden, fijándose en ellas, en vez del sello de guerra, los de Correos y Telégrafos que sean necesarios.

5.º Que en los telegramas que se expidan desde 1.º de Mayo se fije, además del sello que requieran, uno de Correos y Telégrafos en sustitucion del sello de guerra de cinco céntimos que llevan actualmente.

6.º Que desde el 21 de Abril próximo se supriman y queden fuera de circulacion los sellos del impuesto de guerra de cinco y quince céntimos.

Y 7.º Que por la Direccion general de Rentas Estancadas y la Interencion general de la Administracion del Estado se dicten las disposiciones necesarias, tanto para llevar á efecto la reforma de que se deja hecho mérito, como para el canje de los sellos que se retiren de la circulacion.

Al comunicar á V. las precedentes disposiciones para su debido conocimiento y el de las

Estafetas y Carterías dependientes de esa principal; he acordado hacerlo presente que, como consecuencia de la sustitucion de los actuales sellos de Comunicaciones y del impuesto de guerra por los de Correos y Telégrafos, la tarifa nacional, circulada por esta Direccion general en 13 de Julio de 1877, deberá considerarse modificada en la forma siguiente:

TARJETA POSTAL.	Valor.	0.10	0.20	»	»
PORTO DE LA CARTA SENCILLA.	Valor.	0.10	0.25	0.40	0.65
DE LA CORRESPONDENCIA.	Tipo	Cualquiera.	15 gramos.	Id.	Id.
		Interior de las poblaciones.....			
		Península, islas adyacentes y posesiones de Africa.....			
		Cuba y Puerto-Rico.....			
		Filipinas, etc.....			

Además, y como quiera que la modificacion de que se trata no altera el actual porte ó precio de franqueo de la correspondencia, deberá tenerse presente la observacion 2.º de la expresada tarifa, exigiéndose á las cartas que exedan del tipo, por cada 15 gramos ó fraccion, con destino:

A la Península, islas adyacentes y posesiones, 10 céntimos.

A Cuba y Puerto Rico, 25 céntimos.

A Filipinas, etc., 50 céntimos.

Finalmente, el recargo de 10 céntimos por kilogramo á los libros é impresos, y el derecho fijo é invariable de certificado, deberá exigirse su total importe en los nuevos sellos de Correos y Telégrafos.

Y por Real orden de 15 de Marzo último, se dispone: Que los sellos actuales de Comunicaciones y los del impuesto de guerra de cinco y quince céntimos de peseta, que en 1.º de Mayo deben sustituirse por los denominados de Correos y Telégrafos, sean admitidos y circulen simultáneamente con los nuevos, durante el precitado mes de Mayo; en la inteligencia que,

desde el 1.º de Junio próximo, no se dará curso á las cartas y pliegos franqueados con los actuales sellos, considerándolos para todos los efectos como no francos.

Todo lo que hago público para conocimiento general.

Orense 5 de Abril de 1879.—El Administrador principal, Antonio Somoza de la Peña.

ANUNCIOS.

Obras modernas que se hallan de venta en la

LIBRERÍA DE VICENTE MIRANDA,

Paz, 5, Orense.

EL DERECHO AL ALCANCE DE TODOS.

Lastres: Jurisprudencia popular. Esta coleccion se compondrá de 20 tomos á 5 rs. uno. Van publicados: El Matrimonio. El Testamento y la Herencia. El Arrendamiento y el Desahucio. La Patria Potestad. La Tutela y la Curatela. El Préstamo. La Compra-venta. Las servidumbres. El Legado, la Mejora y la Reserva. Contratos y obligaciones. La Fianza y la Prenda.

Legislacion Notarial y del Papel Sellado, anotada y concordada con leyes posteriores, sentencias del Tribunal Supremo, Consejo de Estado, etc., 16 rs.

Ahrens: Compendio de la Historia del Derecho Romano, version directa del alemán, con notas criticas por F. Giner, 10 rs.

Manual Arancelario, compilado, concordado y anotado por Serrano y Oteiza, 5 rs.

Corbella: Manual completo del servicio militar y del reemplazo del ejército y la marina. Contiene toda la legislacion vigente, 10 rs.

Código civil de Méjico, 20 rs.

Anuario oficial de Correos de España.

INTERESANTE.

Venta á plazos semanales, mensuales y como mejor convenga.

En Orense.—Calle de Viriato, números 1 y 2, platería de Sampayo y Nóvoa, hay relojes de sobremesa despartador desde 40 á 50 reales uno; los hay de plata desde 130 reales uno. De oro para señora y caballero un gran surtido de última novedad de las mas acreditadas fabricas de Suiza.

En el mismo establecimiento se halla tambien un gran surtido de leontinas de dúblé y plata desde dos reales hasta 200, y en oro desde 600 hasta 2.000.

Se toma á cambio plata, oro y piedras finas, por todo su valor, y se cambian relojes.

Tambien se componen á precios arreglados y se garantizan todos los objetos incluso las composturas siempre que lleguen á 20 reales.

A voluntad de sus dueños se venden en licitacion privada, una casa sita en la Plaza Mayor de esta capital, contigua á la Iglesia de Santa Maria la Mayor; un solar en la calle de Colon y otras dos casas en construccion con una huerta adyacente, sitas en la calle del Villar, que pertenecen todas ellas á la testamentaria de don Ulpiano de Navas.

Las personas que se interesen en su adquisicion pueden concurrir el dia 26 del corriente de diez á doce de la mañana al despacho de D. Ramon Iglesias en donde pueden hacer las proposiciones que le convengan. 8-3

YANO SE COSE Á MANO
"SINGER"

garantiza sus legitimas máquinas para coser.

A propuesta de los representantes de

LA COMPANIA FABRIL

"SINGER"

varios Ayuntamientos, Diputaciones provinciales y Juntas de Instruccion pública, han autorizado á las professoras de los colegios de niñas á su cargo para incluir en el presupuesto de material el importe de una máquina para coser. Tan respetables corporaciones han tomado en cuenta el beneficio que reportará la instruccion de las jóvenes en el manejo de tan necesario aparato, puesto que dentro de poco tiempo podrá contarse con un gran número de ellas dispuestas para presentar en el mercado los artículos de confeccion en las múltiples formas de este ramo, reemplazando al ponoso trabajo manual con el fácil y perfecto de la máquina.

Las máquinas de

LA COMPANIA FABRIL

"SINGER"

han sido adoptadas para los trabajos oficiales, como construccion de uniformes, etc., por los gobiernos de Inglaterra, Francia, Rusia, Estados Unidos y otros países.

VÉNDENSE Á PLAZOS

desde 10 REALES semanales.

sin entrada ni aumento alguno en los precios.

10 POR 100 AL CONTADO.

Máquinas para familia é industriales y para toda clase de costura.

Pídanse Catálogos ilustrados, con listas de precios y las condiciones de venta á plazos, en el

Depósito de esta provincia

ORENSE, PAZ, 30, ORENSE.

ORENSE: IMP. DE JOSE M. BA. OS.



La capit. desp. Las n. pobre al ser pagu.

PR

P

-DEL C

S. M

tinúa en

en su in

De

la Ser

Astúria

fantas

Doña

Maria I

MINIS

Por

Estado

dictam

«Exe

examin

interpu

Alvarez

la Pueb

provid

provinc

respons

setas 31

Resul

vo á su

las cont

blo dur

1875, 1

1877,

D. Eug

de Abra

este las

Ayuuta

deracion